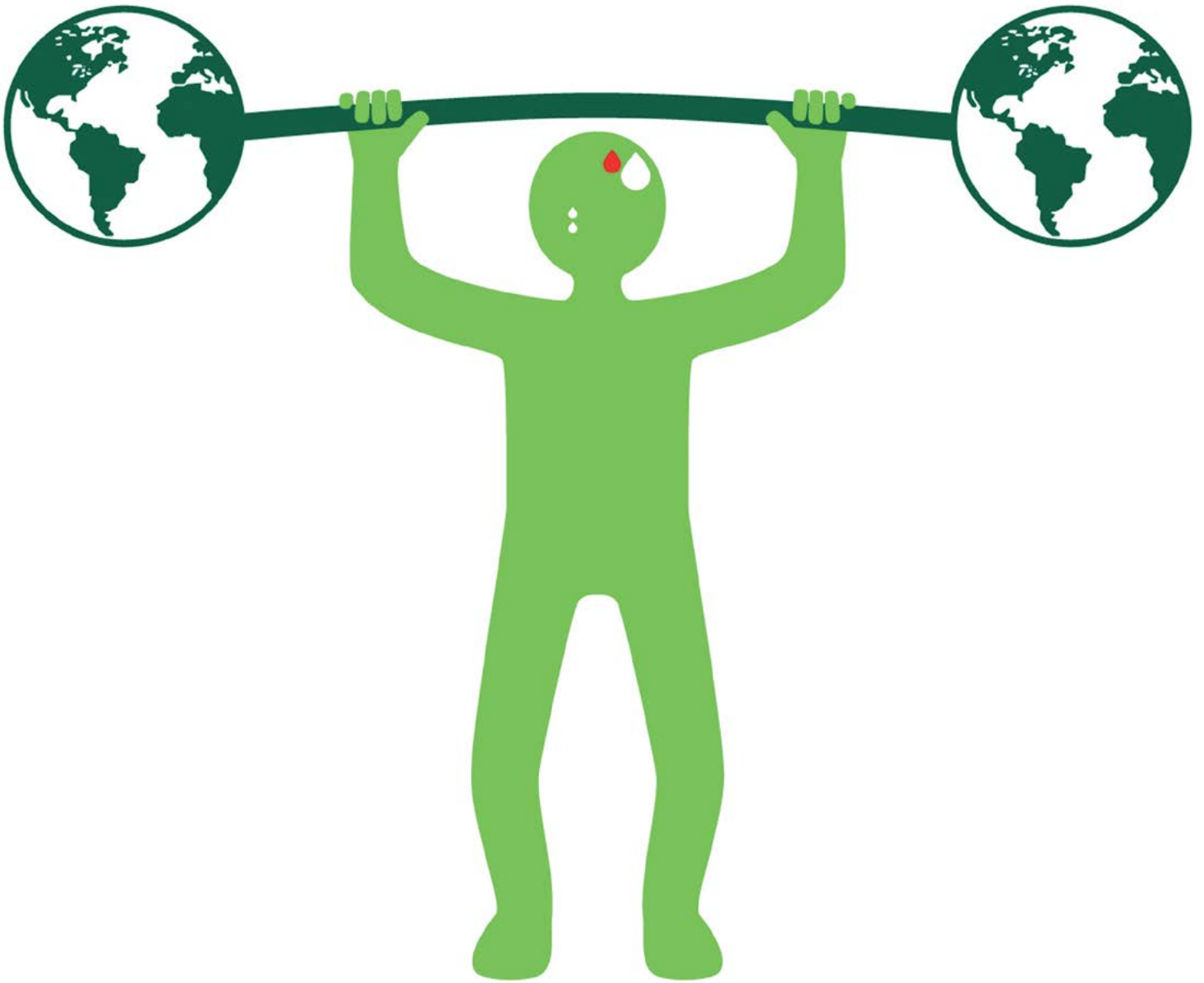


El precio del activismo



Índice

Introducción

- > Honduras: el riesgo más alto del mundo
Con nombre y apellidos: Berta Cáceres
- > Brasil: el precio de la madera
Con nombres y apellidos: María do Espírito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva
- > Filipinas: persecución del activismo
Con nombre y apellidos: Mia Manuelita Mascariñas-Green
- > África: largo historial contra el activismo
Con nombre y apellidos: Wangari Maathai
- > España: el activismo también tiene un precio
Con nombre y apellidos: Gladys del Estal
Con nombre y apellidos: Paca Blanco
Con nombres y apellidos: Xabier Ribes y David Iglesias
Con nombres y apellidos: Azahara Peralta, Gracia Ballesteros y Francisco Valiente

Recomendaciones

“Nuestra estrategia no debe solo enfrentarnos al imperio, sino sitiario. Privarle de oxígeno. Avergonzarlo. Burlarse de él. Con nuestro arte, nuestra música, nuestra literatura, nuestra obstinación, nuestra alegría, nuestro brillo, nuestra implacabilidad – y nuestra capacidad de contar nuestras propias historias. Recordad esto: somos muchos y son pocos. Nos necesitan más de lo que los necesitamos. Otro mundo no solo es posible, sino que está en camino. En un día tranquilo, puedo oírlo respirar”

Arundathi Roy. War Talk

Introducción

El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016 despertó una gran ola de solidaridad y repulsa en la sociedad civil. Berta, feminista y defensora de los derechos humanos, fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y galardonada con el Premio medioambiental Goldman en 2015, fue asesinada como resultado de su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que, de llevarse a cabo, sería la causante directa de la destrucción de bosques nativos y territorios indígenas en Honduras.

Doce días después de su muerte, Nelson García, también miembro de COPINH era asesinado. Tres meses más tarde, Lesbia Yaneth Urquia era asesinada. Yaneth también participaba en la campaña para detener la construcción de la presa de Agua Zarca. Desde 2012, diez activistas de COPINH han sido asesinados.

Estos ejemplos sirven para mostrar la dimensión global de la indefensión del activismo ambiental. En los últimos dos años han asesinado a más de 340 activistas medioambientales y de derechos humanos. Una muerte cada poco más de dos días.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, de ser informados y consultados y de no ser privados, en ningún caso, de sus propios medios de subsistencia. Pero el activismo en defensa de los recursos naturales y el territorio se ha convertido en una de las actividades más peligrosas del planeta en mucho puntos del mismo.

La demanda continua de recursos naturales como el agua, diversos minerales, el aceite de palma o la madera se ha convertido en objeto preciado para empresas y gobiernos a cualquier precio, sin tener en cuenta los derechos humanos y sobre el territorio de aquellas comunidades donde se hallan dichos recursos. Como consecuencia, la violencia ejercida sobre las poblaciones afectadas no ha dejado de crecer en los últimos años.

Según Oxfam¹, los asesinatos y represión contra quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina están relacionados directamente con el modelo económico imperante, que fomenta la desigualdad

extrema e impacta negativamente en los derechos fundamentales de la población, especialmente sobre los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y el aislamiento geográfico los exponen particularmente al acaparamiento de tierras para la explotación de recursos naturales. *Global Witness* señala que, en 2015, casi un 40% de las víctimas de estos actos de violencia extrema fueron indígenas.

Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para ser activista ambiental o defender los derechos humanos. Según el informe de *Global Witness*² “En Terreno Peligroso”, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, 122 en América Latina. Los dos países más peligrosos para el activismo ambiental son Brasil, con 50 personas asesinadas y Filipinas, con 33 muertes.

Sector	Número de asesinatos
Industria minera y extractiva	42
Agroindustria	20
Tala de madera	15
Presas hidroeléctricas, derecho al agua	15
Caza Furtiva	13

Fuente: Informe En Terreno Peligroso. *Global Witness* 2016.

El propósito de este informe es señalar la insostenible situación de acoso y violencia que sufren las personas que defienden los derechos ambientales, sociales, culturales y económicos y que se reparten por todo el planeta. Aquí se recogen algunos ejemplos que son solo una muestra de la situación global.

Y también nos hemos fijado en España, donde el respeto a los derechos humanos está consolidado, pero donde el activismo ambiental también tiene un precio. Hemos querido poner nombre y apellidos a algunas de esas personas que con su activismo nos han dado y nos dan un ejemplo de coraje y valentía a diario.

Honduras: el riesgo más alto del mundo

Honduras está considerado el país menos desarrollado y más pobre de Latinoamérica, después de Haití, Guatemala y Nicaragua. Ocupa el puesto 121 (entre 187 países) en la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta situación de empobrecimiento afecta especialmente población rural (cerca de seis de cada diez hogares de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema) y, en particular, a las comunidades indígenas. Estos niveles de pobreza contrastan sobremanera con la rica biodiversidad que presenta su territorio.

En el triángulo norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mueren más personas asesinadas al año que en la mayoría de las zonas en conflicto del planeta, según reconoce Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional considera que en 2016 Honduras fue, junto a Guatemala, el país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra y el medio ambiente; las personas dedicadas al activismo ambiental fueron objeto de una ola de amenazas, cargos falsos, campañas de difamación, agresiones y homicidios.

Las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos nocivos para el medio ambiente, según ha denunciado *Global Witness*.

Una misión de las Brigadas Internacionales de Paz³ (PBI) constató que en Honduras existe un escenario de “inseguridad crónica” para las personas defensoras que afecta especialmente a la justicia, periodistas, colectivos de diversidad sexual y a quienes reivindican el acceso a la tierra y al territorio. Y especialmente vulnerable es la situación de las mujeres activistas, en un entorno con índices alarmantes de violencia hacia las mujeres.

Una de las causas fundamentales de esta situación de violencia, según la investigación realizada por la PBI es la aprobación de leyes que consolidan un modelo de desarrollo que facilita la explotación de los recursos naturales y vulnera el derecho al territorio de las comunidades campesinas, indígenas y afrohondureñas. Es el caso de la Ley General de Aguas, que posibilita la concesión a terceros de los recursos hídricos del país sin consulta previa a las comunidades afectadas. Como resultado, estas comunidades y movimientos indígenas se han organizado para alertar de los impactos de los proyectos, la necesidad de realizar estudios de impacto medioambientales previos y garantizar el respeto del derecho de las comunidades a ser informadas y consultadas. Debido a ello sufren amenazas, actos de hostigamiento, agresiones a su integridad física, persecución por la vía judicial e incluso son asesinados. En la región de Bajo Aguán, una de las más conflictivas

del país, la lucha del campesinado por sus tierras contra las empresas productoras de aceite de palma ha causado 130 muertos en los últimos seis años⁴.

El número de activistas por los derechos humanos y ambientales que han perdido la vida en Honduras no deja de crecer y crecer. Según se estaba redactando este informe conocíamos el asesinato de José Santos Sevilla cuando se encontraba en su casa en Montaña de la Flor. José era el líder de la comunidad indígena Tolupan y estaba embarcado en la defensa de las tierras ancestrales de esta comunidad frente a proyectos de minería y tala. En 2015, Naciones Unidas había alertado de la violencia llevada a cabo contra los Tolupan y la impunidad con que era ejercida.



Con nombre y apellidos: Berta Cáceres

“La Madre Tierra, militarizada, cercada, envenenada, [...] nos exige actuar.”

Berta Cáceres 1971-2016

El 2 de marzo de 2016, hombres armados asesinaron a la activista Berta Cáceres. Berta llevaba años trabajando para detener la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, que pondría en peligro el río Gualcarque, importante fuente de agua y alimentos, y sagrado para el pueblo indígena lenca. Con su lucha consiguió que el mayor constructor mundial de presas se retirara del proyecto de la represa. También logró que el Banco Mundial abandonara la iniciativa.

Este asesinato recibió gran atención mediática y se

demandó una investigación internacional independiente del asesinato. Durante el ataque a Berta resultó herido el activista Gustavo Castro, miembro de la organización Amigos de la Tierra. Poco tiempo después redactó la siguiente carta:

Vi morir a Berta en mis brazos pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPINH ha realizado, en tantísima gente que la conocimos. No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas por su partida, pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenca que se enfrenta día a día, palmo a palmo disputándose el territorio contra las grandes transnacionales.

El asesinato de Berta podrá significar para muchas empresas e intereses la oportunidad para avanzar sobre sus territorios. (...) Y es que mis declaraciones les estorban para culpar a quienes quieren meter a la cárcel. No escuché carros llegar ni irse cuando el asesinato; el escenario del crimen fue modificado y alterado; las pruebas de sangre y otras dejaron líneas en blanco que luego pueden ser alteradas; mandan a declarar a la mayoría a gente del COPINH y no a los sospechosos tiempo atrás de estar intentando asesinar a Berta. (...) ...llegaron para que viera fotos y videos e identificar al asesino que me encontré cara a cara, pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del COPINH, para que señalara quién de ellos había sido. Pero no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios.

Gustavo Castro, marzo de 2016

Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó - y, a menudo derrotó - a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Antes de su asesinato, acumulaba una larga lista de amenazas y ataques⁵ a su persona. En 2015 recibió el Premio Goldman⁶, conocido como el “Nobel Verde”, por su labor.

En octubre de 2016, las autoridades hondureñas detuvieron a Roberto Cardona, exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, como presunto autor intelectual del asesinato⁷. Cardona había ampliado el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que ejecutaba la empresa Desarrollos Energeticos Sociedad Anónima (DESA). Además fueron detenidas otras siete personas como presuntos autores materiales del asesinato. Recientemente, gracias a la filtración de documentos judiciales, se ha conocido que el asesinato de Berta fue llevado a cabo por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país⁸.

Como ha solicitado el relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, la investigación de este asesinato sigue pendiente de la creación de una comisión independiente e internacional. Esta comisión es imprescindible para que se investigue en profundidad las relaciones entre los inculpados y detenidos y el poder político y económico en Honduras.



© Greenpeace / Daniel Beltrá

Brasil: el precio de la madera

Global Witness señala que los estados amazónicos brasileños están viviendo unos niveles de violencia sin precedentes. Allí, las comunidades se están viendo invadidas impunemente por plantaciones agrícolas o campamentos madereros ilegales. Mientras que la tala ilegal está arrasando la selva tropical, la frontera agrícola y las grandes infraestructuras están invadiendo reservas indígenas intactas. Se calcula que el 80% de la madera de Brasil es ilegal y que representa un 25% de la madera ilegal

de los mercados mundiales. Una gran parte de ella se vende posteriormente a compradores de Estados Unidos, Europa y China.

En 2016, los defensores y defensoras de los derechos humanos —especialmente aquellos que defendían los derechos medioambientales y los derechos a la tierra— sufrieron amenazas y agresiones de forma continuada, según el último informe de Amnistía Internacional. Solo entre enero y septiembre, al menos 47 defensores y defensoras perdieron la vida de manera violenta. Se trataba de personas que trabajaban en la pequeña agricultura, campesinado, trabajos rurales, en la abogacía y en la pesca, indígenas y habitantes de las riberas— en su lucha por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Amnistía Internacional señala además, que estos homicidios no son investigados y la mayoría de los delitos quedan impunes por regla general.

Con nombres y apellidos: María do Espírito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva.

“Mi trabajo es promover el bosque. Defiendo los bosques y a sus habitantes, debido a ello estoy amenazado por los empresarios de la madera y por aquellos que no quieren ver el bosque en pie. Eso me ha causado problemas. Cuando hablamos de la vida, nosotros queremos seguir con vida”

José Claudio Ribeiro da Silva. Febrero de 2011

José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo fueron asesinados a manos de pistoleros el 24 de mayo 2011 cuando salían de una reunión en el proyecto Agroextractivista Praia Alta Piranhiera, en el municipio de Nueva Ipxuxina, en el estado del Acre, una de las zonas más devastadas y violentas de la Amazonía brasileña. Se trata de una reserva de más de 20.000 hectáreas en la que residen cerca de 500 familias. María y Zé Claudio habían levantado su voz en contra de las madereras implicadas en la tala ilegal y de los ganaderos y acaparadores de tierras en la región. Durante años, vivieron bajo amenazas de muerte.

Zé Claudio, al igual que Berta Cáceres, predijo su propia muerte⁹: “Vivo con una bala apuntando mi cabeza que puede ser disparada en cualquier momento... Van a hacer conmigo lo mismo que hicieron con Chico Mendes¹⁰ o con la hermana Dorothy¹¹. Hoy puedo estar aquí hablando con todos ustedes, pero dentro de un mes pueden leer la noticia de mi muerte”.

Tres personas fueron juzgadas por estos asesinatos, dos de ellas resultaron condenadas, Lindonjonson Silva y Alberto Nascimento, y una absuelta. El absuelto, Zé Rodrigues, había comprado dos terrenos de forma ilegal en la reserva y había desalojado por la fuerza a las tres familias que vivían ahí. Esas familias acudieron a María y Zé Claudio para pedirles ayuda¹².

Actualmente el asentamiento donde fueron asesinados María y Zé Claudio ya no está rodeado de selva tropical. La llegada de los madereros arrasó la selva y el paisaje de hoy muestra zonas de pasto y algunos árboles muertos, muy lejos del ideal de ambos: un paisaje soñado para obtener ingresos sostenibles a través de la producción de aceite, pulpa de cupuaçu y otros productos forestales.

Filipinas: persecución del activismo

Filipinas es señalada por *Global Witness* como una de las naciones con más asesinatos de activistas ambientales. La minería especialmente, así como el apropiamiento de tierras para su deforestación y la tala ocasionaron el asesinato de 33 personas en 2015.

Amnistía Internacional señala en su último informe que Filipinas se encuentra junto a otros países como China o Corea del Norte, entre aquellos que practican la tortura y otros malos tratos contra quienes defienden los derechos humanos, grupos marginados y otras personas.

Los ataques a quienes reclaman sus derechos son constantes por parte de las fuerzas de seguridad, acusados por Amnistía de emplear una fuerza innecesaria y excesiva. En abril del año pasado, dos personas resultaron muertas y decenas heridas cuando la policía dispersó con armas de fuego una manifestación de 5.000 agricultores y agricultoras que reclamaban ayudas en forma de suministros de arroz. En octubre, la policía disolvió brutalmente una concentración convocada por organizaciones indígenas frente a la embajada de Estados Unidos para pedir el fin de la militarización y de la invasión de sus tierras ancestrales. En noviembre, al menos dos personas resultaron heridas cuando un furgón policial se abalanzó contra unos manifestantes que protestaban a las puertas de la embajada estadounidense en Manila.

El 1 de julio, dos hombres armados mataron en Mariveles (provincia de Bataán) a la activista medioambiental Gloria Capitan, lideresa activista de Kilusan, organización miembro del Movimiento de Filipinas por la Justicia Climática. Ate Glo, como la llamaban quienes la conocían

fue muy activa en la lucha en defensa del medio ambiente y había promovido una serie de movilizaciones y peticiones solicitando el cierre permanente de la industria del carbón en su comunidad.

Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el escaso número de investigaciones, juicios y condenas ante los constantes actos de hostigamiento, desapariciones forzadas y homicidios de los que eran víctimas las personas activistas.

Con nombre y apellidos: Mia Manuelita Mascariñas-Green

“Es nuestro deber como filipinos luchar contra esta cultura de impunidad, debemos luchar contra la injusticia, el salvajismo y el uso de la violencia para silenciar a aquellos que están trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor ... Que nuestras acciones y nuestros movimientos impulsen a nuestra sociedad hacia un futuro verde y pacífico, exigimos justicia para Mia “.

Yeb Sano, director de Greenpeace South Asia

Abogada especializada en delitos contra el medio ambiente y defensora de los derechos de las mujeres y de la infancia, fue salvajemente asesinada el pasado 15 de febrero en presencia de sus tres hijos pequeños mientras regresaba a su casa en la ciudad de Tagbilaran, provincia de Bohol. Al menos 24 casquillos fueron recuperados en la escena del crimen.

Mia era miembro del Centro de Asistencia Legal Medioambiental, una organización con la que Greenpeace trabaja muy de cerca en la defensa de los los derechos humanos y la justicia climática. Ahora Mia engrosa una terrible lista de personas activistas asesinadas en Filipinas por defender los derechos al territorio, al agua y al medio ambiente.

Con su muerte son ya 112 activistas ambientales asesinados en Filipinas en los últimos 15 años, según la organización medioambiental Kalikasan¹³.

Mia Manuelita era muy respetada y conocida en su comunidad. Según las últimas investigaciones policiales, es probable que su asesinato esté relacionado con el trabajo que llevaba a cabo.



© Greenpeace / Jiro Ose

África: largo historial contra el activismo

La organización *Global Witness* reconoce en sus informes que se tienen pocos datos sobre el número de activistas ambientales asesinados en el continente africano, posiblemente por la opacidad de la información y la gran cantidad de terrenos remotos y difícilmente accesibles.

El continente africano tiene un largo historial de represión de la libertad de expresión y de la disidencia. Aunque el último informe de Amnistía Internacional¹⁴ reconoce que en 2016 se han producido protestas por parte de la sociedad civil inimaginables solo un año antes.

A pesar de que la represión, brutal en algunos casos, ha continuado, la población ha salido a la calle a reivindicar sus derechos.

También ha continuado la persecución de aquellos que defienden los derechos humanos, periodistas y opositores políticos en una decena de países africanos. Solo en Kenia, 177 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los servicios de seguridad en 2016.

Igualmente, la población civil sigue sufriendo año tras año graves violaciones de los derechos humanos en conflictos armados en una larga lista de naciones africanas. Especialmente grave sigue siendo el reclutamiento de niños y niñas soldado en algunos países.

© Christian Åslund / Greenpeace



Con nombre y apellidos: Wangari Maathai

“En el mundo hay una nueva fuerza colectiva que moviliza a las personas por la paz. Es necesario que se vincule ese movimiento con la protección del medio ambiente y que esta visión colectiva no solo sea para nuestro país sino también para toda África”

Wangari Maathai

Para Wangari Maathai, los árboles eran símbolos de paz y de esperanza. Falleció en 2011, tras una vida de lucha por la democracia, los derechos humanos y la conservación del medio ambiente a través de los árboles.

Nacida en Kenia en 1940, fue la primera mujer en África Central y Oriental en obtener un título de doctorado y la primera en recibir el premio Nobel de la Paz en 2004. Su objetivo fue la reducción de la pobreza y la conservación del medio ambiente a través de la plantación de árboles. Junto a otras mujeres, lideró el movimiento conocido como Cinturón Verde, plantando más de 40 millones de árboles en Kenia. Países como Tanzania, Uganda, Malawi, Etiopía y Zimbabwe han imitado con éxito este movimiento social y ambiental.

Su lucha no fue fácil, fue golpeada en repetidas ocasiones, incluso llegó a estar encarcelada, acosada y públicamente vilipendiada por el régimen de Moi en Kenia. A pesar de ello llegó a ser diputada del Parlamento de Kenia y años más tarde asesora del Ministerio de Medio Ambiente.

España: el activismo también tiene un precio

España tiene una larga historia de lucha por la defensa medioambiental. Si no fuera por las personas que se han dejado la piel defendiendo la integridad del territorio y oponiéndose a proyectos de infraestructuras, construcciones y denunciando la corrupción, hoy no tendríamos muchas de las leyes y normas de protección que garantizan, al menos en el papel, la existencia de una naturaleza privilegiada.

Sin embargo, en estos últimos años estamos asistiendo a un retroceso imparable tanto de las normativas ambientales de protección como de la restricción injustificada del derecho a la libertad de expresión, información, reunión y protesta. La entrada en vigor en 2015 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) ha supuesto el recorte a todos estos derechos democráticos, garantizados en nuestra Constitución.

La corrupción, entrelazada desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad, incide en la conservación del medio ambiente. O al revés, impacta en nuestros derechos constitucionales en la medida en la que se toman interesadamente decisiones políticas que atentan contra nuestro derecho a disfrutar de un medio ambiente en buenas condiciones. En la última década hemos visto numerosos proyectos de infraestructuras, construcciones y modificaciones de normativas “a la carta” para dar cabida a agresiones ambientales. Un buen número de personas y colectivos han denunciado muchas de las agresiones y han sido objeto de acoso.

Con nombre y apellidos: Gladys del Estal

Gladys es una de esas víctimas que casi nadie quiere recordar. Murió por defender el agua, el sol y la libertad.

Rafael Narbona.

El 3 de junio de 1979 durante la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear, convocada tras el accidente nuclear ocurrido en Harrisburg¹⁵ fue asesinada Gladys del Estal Ferreño¹⁶ en Tudela (Navarra), durante una manifestación antinuclear. Tenía 23 años.

El asesinato fue llevado a cabo por el guardia civil José Martínez Salas, juzgado y condenado a un año y medio de cárcel que no llegó a cumplir, casi la misma pena que la de un ecologista de Mallorca (un año de cárcel), cuyo



único delito fue colocar una pancarta de protesta contra la muerte de Gladys. Martínez Salas fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar por el Gobierno de Felipe González en 1992¹⁷.

Gladys era militante ecologista. Pertenecía al Grupo Ecologista de Egia y a los Comités Antinucleares de Euskadi. Participó en la organización de numerosas actividades ecologistas, como marchas ciclistas y manifestaciones contra la central nuclear de Lemoniz.

La protesta contra su asesinato fue unánime y general, con manifestaciones y huelgas en todo Euskadi y en otras zonas del Estado. Gracias a su sacrificio y al de otros muchos, fue posible paralizar los dos grupos nucleares de Lemoniz.

El Ayuntamiento de Tudela le dedicó un calle.

Con nombre y apellidos: Paca Blanco

Sabemos que Paca es sobresaliente en calidad humana, generosidad, lucha y entrega desinteresada más allá de lo que no suponga el bien común y por ello queremos agradecerle todos y cada uno de los años que se ha expuesto, arriesgado, interesado y luchado por un mundo donde a las personas no se les niegue el derecho a conocer, disfrutar y conservar un medio ambiente que es de todos pero que no nos pertenece, porque tenemos la obligación moral y personal de dejarlo habitable para las generaciones futuras.

Manifiesto del Grupo Local de Ecologistas en Acción en Mérida

Paca Blanco, de 68 años, ha sido objeto de una de las campañas de acoso político y empresarial más intensas que se recuerdan por ser una activista ambiental. Conocida por su lucha antinuclear desde hace más de 20 años, en los últimos cinco años ha sufrido en primera persona los sinsabores de oponerse a un macrocomplejo urbanístico en su localidad.

Su oposición pública al proyecto ilegal de Marina Isla de Valdecañas¹⁸ en El Gordo (Cáceres) con más de 550 viviendas, equipamientos hoteleros, un campo de golf de 18 hoyos y puerto deportivo en un terreno protegido (perteneciente a la red natura 2000, y declarado por la UE como Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario), no le ha salido barato.

Su casa ha recibido el impacto de seis cócteles molotov,

le han roto los cristales de las ventanas, incendiado su buzón y provocado daños en su coche. Además, según ha denunciado Ecologistas en Acción, Paca se ha visto acusada en los medios de comunicación de todo tipo de cuestiones: donde aparcaba, si tiraba escombros, si se le escapaba una gota del riego o qué texto tenía el anuncio de venta de su casa. Estos hechos pasaron a tener mayor relevancia en los medios regionales que el hecho de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como el Supremo hayan dado la razón a Ecologistas en Acción y otras organizaciones ciudadanas, sentenciando que la macrourbanización es una operación urbanística ilegal y ordenando su derribo.

El mismo día que se conoció la sentencia, Paca pidió protección¹⁹ a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y finalmente, ha decidido marcharse del pueblo.

Ecologistas en Acción ha redactado un manifiesto de apoyo a Paca, al que se están adhiriendo colectivos conservacionistas, intelectuales y artistas.

Con nombres y apellidos: Xabier Ribes y David Iglesias

“Nosotros nos debemos a la naturaleza, al artículo 45 de la Constitución que dice que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”

Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales²⁰.

El activismo ambiental también se realiza desde el puesto de trabajo. Los y las agentes forestales y medioambientales son responsables de velar porque las leyes se cumplan en la naturaleza. Incendios, construcciones ilegales, caza furtiva, expolio arqueológico, cierre de caminos públicos y vías pecuarias, vertidos...

Dicho trabajo les acarrea más de un problema, pero la situación ha empeorado bastante desde que el Gobierno aprobó la nueva Ley de Montes en 2015, que retira atribuciones al cuerpo de agentes forestales para vigilar, investigar y denunciar los delitos ambientales. La modificación de esta ley fue duramente criticada por grupos ecologistas, sindicatos, colegios profesionales de biólogos e ingenieros forestales.

El pasado 22 de enero Ismael Rodríguez mataba a dos agentes forestales, Xabier Ribes y David Iglesias de varios disparos en la cabeza en la localidad de Aspa (Lleida). Los agentes se encontraban comprobando la documentación

del cazador cuando éste les disparó. El cazador no tenía en regla el permiso necesario para utilizar el arma que portaba.

Uno de los dos agentes asesinados era delegado de prevención y era el encargado de impulsar el protocolo contra amenazas y agresiones que a menudo sufre este cuerpo, según CC.OO.

En España existen 6.000 agentes forestales que llevan más de diez años denunciando la carencia de medios y de seguridad con la que se enfrentan a su trabajo diario. El colectivo ha demandado una Ley Básica Estatal que recoja las potestades actuales de los Agentes Forestales y les dote de formación y medios de defensa adecuados para ejercer la profesión y la modificación de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se reconozca la especificidad policial medioambiental de los Agentes Forestales.

Con nombres y apellidos: Azahara Peralta, Gracia Ballesteros y Francisco Valiente

El llamado “caso Acuamed” destapó un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en 2016 tras la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales y la falsificación de documentos para aumentar los pagos a las empresas adjudicatarias entre 2007 y 2014. Según datos publicados por *El País*²¹, uno de los casos principales investigados es la descontaminación del embalse de Flix en Tarragona. Adjudicado a FCC, la investigación estima que el fraude puede alcanzar los 25 millones de euros.

Azahara Peralta, ingeniera agrónoma de Acuamed, dirigió las obras de descontaminación del embalse de Flix, y perdió su trabajo (despido disciplinario) al negarse a participar en el inflado de facturas a favor de FCC. Se negó a firmar un sobrecosto de 40 millones²².

«Empezó siendo de 34 millones, pero un tiempo después había subido hasta los 70 millones, y todo por modificaciones del proyecto que decían que se habían realizado, pero también por muchas otras futuribles, que decían que se iban a hacer. Cuando me reclamaban los 70 millones, en una reunión llegaron a decirme que si lo dejábamos en 40 se quedaban conformes».

Declaraciones de Azahara Peralta²³

Gracia Ballesteros, entonces gerente de Acuamed para Cataluña y Valencia, también fue despedida (igualmente despido disciplinario) por negarse a facilitar sobornos. Antes del despido fue sometida a acoso laboral.

En ambos casos, los responsables de los despidos han sido considerados por la investigación como los cabecillas de la trama de corrupción: Arcadio Mateo, director general de Acuamed, y Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción. Ambos fueron detenidos y encarcelados cuando se destapó la trama. Además fueron imputadas otras once personas.

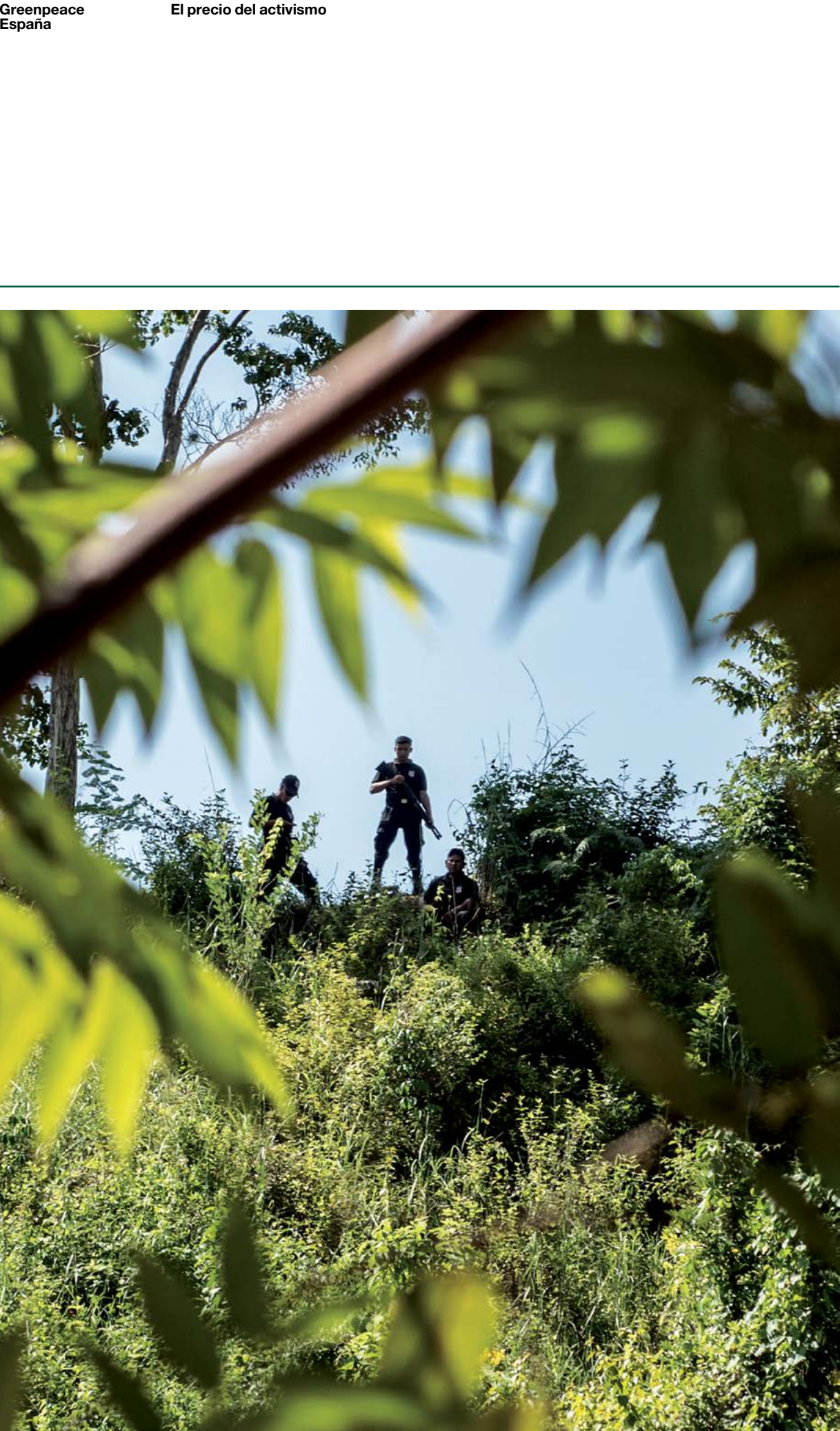
Francisco Valiente, entonces director de Construcción de Acuamed, denunció las irregularidades ante la Audiencia Nacional. Puso en conocimiento los hechos investigados ante el director financiero de Acuamed, Carlos Anibarro, la secretaria del consejo de administración de la entidad, Isabel Bonelli, el director jurídico de Acuamed, Javier Moya, y el abogado del Estado de Agricultura encargado de los asuntos de Acuamed, Pablo Fernández. A las pocas semanas de hacerlo, fue cesado de su cargo y sustituido por Gabriela Mañueco.

Tanto Azahara como Gracia denunciaron su despido ante los tribunales. Azahara sigue a la espera de la resolución. En el caso de Gracia, ganó la denuncia por despido nulo contra Acuamed, pero la empresa se ha negado a reincorporarla a su puesto. Su situación contrasta con la de Gabriela Mañueco, que tras salir de la cárcel gracias al pago de una fianza, fue inmediatamente readmitida en Acuamed, aun estando imputada.

Y no es el único caso. Otros imputados volvieron a sus puestos directivos en Acuamed al salir de la cárcel y el juez instructor de la causa tuvo que pedir que abandonaran la empresa porque podían acceder a documentación relevante para el caso. Según desvelaba *El País*, “Están en su casa, pero cobrando.Y otros dos imputados son los que actualmente dirigen la empresa”²⁴.

Azahara se integró en la Plataforma x la Honestidad²⁵, junto a Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel y Luis Segura, expulsado del Ejército tras denunciar la corrupción existente, un colectivo que agrupa y defiende a quienes han sufrido las consecuencias de denunciar casos de corrupción. Promueven un Anteproyecto de Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas.

Azahara, Gracia y Francisco recibieron recientemente



© Giles Clarke / Greenpeace

el accésit del premio otorgado por la Fundación Hay Derecho²⁶.

La Plataforma independiente Filtra.la²⁷ es una plataforma de denuncia ciudadana a través de la cual cualquier persona puede revelar información de interés público a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de manera segura y anónima.

Recomendaciones

Aplicación de la Normativa Internacional:

- Los Estados deben promover el cumplimiento de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU y ésta debe extenderse a quienes defienden el medio ambiente y el territorio.
- Debe cumplirse el Artículo 8(j) de la Convención de la Diversidad Biológica que establece que, con sujeción a su legislación nacional, se ha de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que incorporen estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación más amplia con la aprobación y participación de los titulares de esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentar la participación equitativa en los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas

- En el plano nacional deben cumplirse las siguientes medidas:
- Deben establecerse medidas efectivas para investigar imparcialmente y esclarecer todos los casos de violencia y acoso contra las personas que defienden el medio ambiente.
 - Deben establecerse medidas de protección efectivas y proveer recursos eficaces a todas aquellas personas que denuncien haber sido víctimas de la violación de sus derechos.
 - Debe garantizarse el derecho a ejercer de forma legítima la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio y acabar con las prácticas de hostigamiento, violencia y represión contras las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales.
 - Debe garantizarse el cumplimiento de la legislación

- nacional e internacional antes de llevar a cabo proyectos y las comunidades afectadas deben formar parte del proceso de aprobación de los proyectos antes de ser ejecutados.
- Los Estados deben llevar un registro de las agresiones ejercidas contra quienes defienden los derechos humanos y ambientales e informar sobre los mismos.
 - La sociedad civil debe denunciar los casos de violencia que conozca y pronunciarse contra todas las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales e informar sobre los mismos y la impunidad en la que se ven envueltas gran parte de las agresiones.
- Y además, específicamente en España:
- Deben eliminarse de la Ley de Seguridad Ciudadana todas las restricciones al derecho a la libertad de expresión, información, reunión y protesta.
 - Debe aprobarse cuanto antes la Ley de protección al denunciante de corrupción en las instituciones públicas.



GREENPEACE

Este documento ha sido producido gracias a las aportaciones económicas de los socios de Greenpeace.

Greenpeace es una organización independiente que usa la acción directa no violenta para exponer las amenazas al medio ambiente y busca soluciones para un futuro verde y en paz.

Hazte socio en greenpeace.es

Greenpeace España
San Bernardo 107
28015 Madrid
T. 91 444 14 00
info@greenpeace.es

greenpeace.es